

Biografías de la delegación de participantes

Ruth Buendia Mestoquiari, presidenta de Central Ashaninka del río Ene.

Ruth Buendia Mestoquiari es una mujer asháninka y una líder de la comunidad indígena de Cutivireni del valle del Ene, en Perú. Tras el período de violencia social vivido en la Selva Central por el movimiento de Sendero Luminoso, Ruth fue desplazada de su comunidad a la ciudad de Satipo, en donde comenzó su trabajo con las organizaciones indígenas CARE (Central Asháninka del Río Ene) y ARPI SC (Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central). En estas organizaciones tuvo la oportunidad de regresar a su comunidad para realizar un trabajo con las mujeres indígenas y los líderes comunitarios. En 2005, Ruth fue elegida como miembro del equipo directivo de CARE y en 2006 fue elegida como presidenta de la organización, y reelegida de nuevo en 2009. Ruth se ha convertido en una importante líder de las comunidades asháninka del río Ene, y en una portavoz clave de los pueblos asháninka que luchan contra el proyecto de la presa hidroeléctrica de Pakitzapango, que causará inmensos impactos sociales y medioambientales sobre las comunidades del valle del Ene.

Sheyla Yakarepi Juruna, Belo Monte

Sheyla Yakarepi Juruna, de 36 años, es la líder indígena de los juruna, de la comunidad de Boa Vista, en el municipio de Vitória do Xingú, en Pará, Brasil. Ha estado involucrada de forma activa en la lucha por la defensa del río Xingú desde la histórica victoria judicial de 1989 que paralizó el Complejo de Presas de Kakarô. Desde su participación en una conferencia indígena nacional con motivo del 5º centenario de Brasil en el año 2000, Sheyla se ha convertido en una importante líder indígena local en el movimiento de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Trabaja para asegurar "salud, educación culturalmente adecuada, demarcación territorial y respeto por los derechos indígenas" de su pueblo. Su fuerte implicación en el movimiento proviene fundamentalmente de la necesidad de los pueblos indígenas de resistirse a las fuerzas destructivas que amenazan su supervivencia, como los planes del Gobierno brasileño de construir una presa en el río Xingú. De este modo, Sheyla se ha convertido en una férrea oponente al complejo de la presa de Belo Monte, en una portavoz clave para los pueblos indígenas que se resisten al proyecto y en una líder del Movimiento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS). Ubicada al lado de la planificada reserva de Belo Monte, la comunidad de Boa Vista se verá gravemente afectada por la presa.

Almir Narayamoga Surui,

Almir Narayamoga Surui, de 36 años y miembro del pueblo paiter surui, nació en la comunidad de Lapetanha, en el territorio indígena Sete de Setembro, Cacoal, Rondônia, Brasil. Tras haber presenciado la destrucción de las tierras ancestrales de su pueblo por colonos que invadieron la región como parte del programa POLONOROESTE, financiado por el Banco Mundial, Almir se decidió a poner fin a este proceso y a defender los derechos humanos y territoriales de los paiter surui. Con 14 años comenzó a estudiar portugués y pronto fue capaz de articular las demandas de su pueblo ante quienes toman decisiones en Brasil y a nivel internacional. En 1994 fue elegido Coordinador General de la federación indígena de Rondônia (CUNPIR). Durante su mandato varios territorios indígenas fueron demarcados en Rondônia, incluido un territorio en el que viven indígenas no

contactados. Almir se opone incansablemente a los invasores ilegales de tierras. Además se encuentra entre los líderes indígenas más reconocidos de Brasil y ha trabajado codo con codo con gobiernos y líderes internacionales, incluido el Príncipe Carlos del Reino Unido, para llamar la atención sobre los derechos territoriales y la protección medioambiental en la Amazonia. También ha trabajado ampliamente por la defensa de los grupos de indígenas aislados a través del grupo CIPIACI (Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay) y se ha pronunciado en contra de los peligros que suponen los enormes proyectos de infraestructuras para estos pueblos.

Breve información sobre las presas.

Información de contexto de la presa hidroeléctrica de Pakitzapango:

La presa hidroeléctrica de Pakitzapango, nombre que toma de la estrecha garganta que en asháninka se refiere al lugar de nacimiento mitológico de las tribus amazónicas, es la última y la mayor amenaza para las comunidades asháninka. A 165 m de altitud, las aguas inundarán casi 100.000 hectáreas y afectarán a más de 10.000 asháninka del valle del río Ene. Estas personas perderán sus hogares, huertos y tierras bajo las aguas de la presa en cuestión de pocos años.

El Gobierno peruano ha llegado a un gran acuerdo con el Gobierno de Brasil para construir una serie de presas hidroeléctricas: la electricidad será exportada para contribuir al abastecimiento energético de los crecientes centros urbanos de Brasil. Una de las piezas claves del proyecto es, precisamente, la presa de Pakitzapango, a la que seguirá, al menos, la construcción de otras cinco presas en la región. La construcción de esta presa y los proyectos asociados en trámite, representan grandes oportunidades de inversión para las compañías privadas y para los bancos de Brasil y otros bancos multilaterales. Las empresas brasileñas Electrobrás, Odebrecht, Engevix, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) están presionando para construir estas presas.

Básicamente, el acuerdo alcanzado entre estos dos gobiernos permitirá a Brasil estudiar, financiar, construir y operar más de seis grandes plantas de suministro hidroeléctrico en territorio peruano para abastecer sus necesidades energéticas mediante la compra de una importante parte de la energía producida en Perú. Las plantas hidroeléctricas seleccionadas por Brasil son Inambari (2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW), Chuquipampa (800 MW), y Pakitzapango (2.000 MW), así como las correspondientes líneas de transmisión que serán integradas dentro del sistema brasileño. El coste total de estas seis obras asciende a 16.000 millones de dólares. Pakitzapango es el segundo proyecto seleccionado en el río Ene, en su confluencia con los departamentos de Satipo y Junín, y costará, aproximadamente, 6.000 millones de dólares. Esta concesión fue otorgada sin informar o consultar a las comunidades asháninka, lo que demuestra la falta de respeto del Gobierno peruano sobre el modo de vida de esta comunidad y, lo que es más importante, por sus derechos humanos como establece la legislación nacional e internacional.

Información de contexto del complejo del río Madeira.

El complejo del río Madeira, un enorme proyecto que incluye la construcción de cuatro presas hidroeléctricas, desenterrar extensas áreas de río y la apertura de canales, ya está siendo construida en la Amazonia occidental de Brasil. El complejo del río Madeira surge como parte de dos grandes iniciativas: por un lado, de la Infraestructura Integrada Regional de Sudamérica (IIRSA), un intento de los gobiernos nacionales de construir una nueva red de infraestructuras en la región, y por otro, del Programa de Crecimiento Acelerado (PAC), el buque insignia del programa de "desarrollo" del ex presidente brasileño Lula.

Pese a haber sido ampliamente promocionado como un proyecto hidroeléctrico necesario para que Brasil pueda atender la creciente demanda energética, la subyacente justificación para la construcción del complejo del río Madeira es que servirá para promover la exportación de materias primas, especialmente de soja, madera y minerales. Por medio de la instalación de esclusas de navegación y el desterramiento para abrir el canal del río, el complejo del río Madeira conectará la parte occidental de Brasil con carreteras que se construirán en la Amazonia peruana y boliviana hacia el Pacífico, facilitando de este modo la exportación de materias primas a Asia y Norteamérica.

Las presas de Santo Antônio y Jirau, ya en proceso de construcción, están provocando impactos negativos en los ecosistemas de la región y en las poblaciones locales, incluidos pueblos indígenas en aislamiento. Los impactos incluyen el desplazamiento definitivo de familias y comunidades, la potencial extinción de especies acuáticas migratorias de las que dependen las comunidades de la zona, una mayor propagación de la malaria, una mayor erosión de las riberas, la pérdida de acceso a los productos agrícolas y de extracción forestal, y un fortalecimiento en la presión de los ya carentes servicios sociales ocasionados por la inmigración de familias en busca de trabajo. La inmensa cantidad de gente que ha invadido la región es mucho mayor que el número de puestos de trabajo generados por la construcción de la presa, lo que ocasiona la masificación de la capital del estado, Porto Velho, y contribuye a problemas comúnmente asociados a la superpoblación de los centros urbanos, como el crimen violento.

BNDES ha aprobado destinar 7.200 millones de reais brasileños a la financiación de la presa de Jirau, mientras que la de Santo Antônio recibirá 6.100 millones de reais brasileños. De no ser por la financiación del BNDES el complejo de Madeira no se construiría, ya que los riesgos y enormes costes del proyecto no atraerían a suficientes inversores de instituciones privadas.

Información de contexto de la presa de Belo Monte:

El Gobierno de Brasil planea construir lo que se convertirá en el tercer mayor proyecto hidroeléctrico en uno de los afluentes más grandes del Amazonas, el Xingú. El proyecto desviará prácticamente la totalidad del curso del río Xingú a lo largo de casi 100 km por lo que se conoce como la Volta Grande (Vuelta Grande), dejando a los pueblos indígenas y a otros habitantes de la zona sin pesca, agua limpia y transporte por el río, que son esenciales para su supervivencia.

La magnitud del proyecto supone que un área de más de 1.500 km cuadrados serían destruidos y provocarían el desplazamiento forzado de entre 20.000 y 40.000 personas, así como graves impactos sobre la tierra y el medio de vida de 800 indígenas y miles de familias ribereñas y urbanas. Se calcula que unos 100.000 inmigrantes lleguen a la región en busca de trabajo, saturando los ya de

por sí limitados servicios públicos en materia de salud, sanidad y seguridad pública, e incrementando la presión sobre los bosques.

Dadas las fluctuaciones estacionales del río Xingú, los 11.000 MW de la presa de Belo Monte podrán producir únicamente una media de un tercio de su capacidad. El proyecto no será económicamente viable sin la construcción de presas adicionales en las partes altas del río que proporcionen agua durante las estaciones secas. Las presas en las partes altas podrían tener nefastas consecuencias para la actual preservación de la selva y de los territorios indígenas del alto Xingú.

Se estima que el complejo de la presa de Belo Monte conlleve un coste superior a los 17 mil millones de dólares, incluidos los 2.500 millones que costarán las líneas de transmisión. El proyecto ha sido desarrollado por la empresa de energía estatal Electronorte, y será financiado principalmente por el BNDES, que ya se ha comprometido públicamente a financiar más del 80% de los costes del proyecto. La financiación de Belo Monte podría representar el mayor préstamo de la historia del BNDES, para la que el banco ha ofrecido condiciones prestatarias sin precedentes, a periodos de 30 años con un interés del 4%, unas condiciones significativamente menores que el coste del capital.